
SESIONES ORDINARIAS

2000

ORDEN DEL DIA N° 65

COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LEGISLACION PENAL

Impreso el día 4 de abril de 2000

Término del artículo 113: 13 de abril de 2000

SUMARIO: Régimen de inmunidades parlamentarias.

1. — Godoy. (953-D.-1999.)¹
2. — González Gaviola. (2.849-D.-1999.)
3. — González Gaviola. (2.850-D.-1999.)
4. — Vitar y Flores. (316-D.-2000.)
5. — Vitar. (318-D.-2000.)
6. — Raimundi y Garré. (482-D.-2000.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal han considerado los proyectos de ley de los señores diputados Godoy, González Gaviola, Vitar; Vitar y Flores; y de Raimundi y Garré sobre régimen de inmunidades parlamentarias; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador o funcionario

¹ Reproducido.

sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente deberá seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador o funcionario no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador o funcionario sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador o funcionario a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la interceptación de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara.

Art. 2º — La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.

Art. 3º — Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los diez días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador.

Art. 4º — Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones.

En cualquier caso regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal.

Art. 5º — En el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo *in limine* de cualquier pedido de desafuero.

Art. 6º — Deróganse los artículos 189, 190 y 191 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 31 de marzo de 2000.

*Elisa M. Carrió. — Dámaso Larraburu.
— Carlos E. Soria. — Ramón H. Torres
Molina. — Nilda C. Garré. — Teodoro
R. Funes. — Ricardo Gómez Diez. —
Manuel J. Baladrón. — René H. Bales-
tra. — Ricardo A. Bussi. — Alfredo J
Castañón. — María T. Colombo. —
Melchor R. Cruchaga. — Guillermo H.
De Sanctis. — Eduardo R. Di Cola.
— José M. Díaz Bancalari. — José G.
Dumón. — Guillermo A. Francos. —
Norma Godoy. — Simón F. Hernández
— Guillermo R. Jenefes. — Adrián Me-
nem. — María C. Merlo de Ruiz. —
Alberto A. Natale. — Mario R. Negri
— Benjamín R. Nieto Brizuela. — Ale-
jandro M. Nieva. — Héctor T. Polino.
— Carlos A. Raimundi. — Jorge Ri-
vas. — Marcelo J. Stubrin. — Atilio
P. Tazzioli. — Juan M. Urtubey. —
Alfredo H. Villalba.*

INFORME

Honorable Cámara:

El presente dictamen establece el alcance y procedimientos de las inmunidades de las autoridades nacionales de los tres poderes del Estado posibles de ser sometidas a desafuero, destitución y juicio político.

El principio fundamental de las inmunidades constitucionales se apoya en la prevención del ámbito de libertad y dignidad en que debe desenvolverse la actividad de las autoridades de la Nación. Pero en virtud de ese mismo principio, y del prestigio y decoro de las instituciones se ha observado que la prerrogativa funcional no puede llevarse a un exceso que contraiga su esencia republicana y que valdría a consagrar una aparente impunidad de las personas que las integran, aun en asuntos que para nada se vinculan con el ejercicio de la función.

El desafuero, la destitución y el juicio político sólo son procedentes cuando se requiere la privación de la libertad física del funcionario para la sustanciación de la causa o para la ejecución de la sentencia. Todo el trámite anterior, mientras no se requiere la privación de la libertad corporal no admite la procedencia de ninguno de estos mecanismos, porque no se justifican ya que hasta esa instancia el juez puede continuar la causa sin interferir en su labor ni en sus prerrogativas. Consecuentemente, cuando el o los delitos imputados a éste no conlleven su detención o sean susceptibles de obtener la eximición de prisión, no es procedente ninguno de estos institutos porque no se hace necesario privar al funcionario de su li-

bertad física. Lo mismo ocurre cuando no se ha dictado la prisión preventiva ni se ha ordenado su detención.

El dictamen así concebido contribuirá sin duda al afianzamiento del sistema constitucional republicano y democrático.

Este dictamen se basa en proyectos que ya han sido dictaminados en la Comisión de Asuntos Constitucionales en los expedientes presentados por los señores diputados Alvarez (C. A.), Fernández Mejjide, Fernández de Kirchner y Acevedo, Maqueda y Soria (C. E.), Estrada, Viqueira y otros, Godoy, y González Caviola, que han sido plasmados en el Orden del Día Nº 2.597/99, que expresa la opinión que en este tema mantiene dicha comisión.

Elisa M. Carrió.

ANTECEDENTES

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGLAMENTACION DE LAS INMUNIDADES PARLAMENTARIAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCION NACIONAL

Artículo 1º — Las inmunidades parlamentarias tienen por único objeto garantizar el libre ejercicio de las instituciones republicanas, asegurando el ámbito de protección funcional en el que se desarrollará la función legislativa.

Art. 2º — Las inmunidades de expresión, arresto y procesamiento penal previstas en los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, regirán desde el día en que hubiera sido electo el legislador, hasta expirado su mandato.

Queda comprendido el período que abarca desde la fecha de la elección hasta el de efectiva asunción en la banca.

En caso de que por cualquier circunstancia el legislador electo no asumiere su mandato, o una vez en funciones fuere reemplazado, sus inmunidades cesarán con la resolución de la justicia electoral en tal sentido.

Art 3º — En el supuesto previsto en el artículo 69 de la Constitución Nacional, en caso de flagrancia, el juez competente dará cuenta a la Cámara respectiva con información sumaria del hecho que haya dado lugar a la detención de un legislador.

Cuando se tratare de delitos graves, la prolongación de la privación de libertad del legislador sospechado, dependerá de la suspensión de sus fueros, una vez que la Cámara respectiva lo decida con dos tercios de votos.

Art. 4º — En el supuesto del artículo 70 de la Constitución Nacional, cuando el juez investigue un hecho del que pueda resultar penalmente responsa-

ble un legislador electo, y siempre que por cualquier causa no hubiere expirado su mandato, no podrá disponer su procesamiento ni cualquier otra medida restrictiva de sus derechos, hasta tanto no se lo suspenda en sus funciones, por parte de la Cámara respectiva con las dos terceras partes de los votos.

En tal sentido, el legislador no será indagado por el juez de la causa hasta que no esté resuelta su suspensión en los términos del párrafo anterior.

Art. 5º — A fin de reglamentar el marco procesal en el ordenamiento adjetivo de la justicia federal en materia penal, sustitúyase el artículo 189 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Cuando se formule requerimiento fiscal o querrela contra un legislador, el juez competente podrá investigar el suceso objeto de la denuncia, en la medida que no implique el procesamiento o restricción de la libertad del legislador imputado, para lo cual quedará habilitado una vez dispuesto su desafuero por parte de la Cámara respectiva.

En caso de que el legislador hubiera sido detenido por habérsele sorprendido participando en la comisión de un delito, el juez o tribunal competente pondrá inmediatamente los antecedentes en conocimiento de la Cámara respectiva, la que decidirá el mérito de la suspensión de los fueros del legislador imputado, con la mayoría prevista en el artículo 70 de la Constitución Nacional.

Art. 6º — En el caso de que una vez suspendido en sus funciones un legislador resultare sobreesido o absuelto, recobrará inmediatamente sus fueros y mandato constitucional hasta la fecha de expiración del mismo.

Art. 7º — Sustitúyase el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, por el siguiente:

Mientras no se produzca la suspensión o destitución del funcionario imputado, a que se refiere el artículo anterior, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones. Hasta tanto perdure la vigencia de las inmunidades parlamentarias, en razón de la detentación del cargo.

Art. 8º — Sustitúyase el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de la Nación por el siguiente:

Cuando se proceda contra varios imputados, las inmunidades previstas para el ejercicio de la función legislativa no empecerán el curso de la sustanciación de la causa respecto de aquellos que no gocen de los privilegios reservados a los integrantes del Poder Legislativo conforme mandato constitucional

Art. 9º — La suspensión de los fueros dispuesta en los términos del artículo 70 de la Constitución Nacional pondrá al legislador suspendido a disposición del juez o tribunal que hubiera requerido su desafuero.

En el supuesto de que otros magistrados le imputasen la comisión de un delito al legislador suspendido, deberán peticionar su procedencia a la Cámara respectiva, previo a disponer su procesamiento.

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Norma Godoy.

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

INMUNIDAD DE ARRESTO DE FUNCIONARIOS

Artículo 1º — Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra el presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros del Poder Ejecutivo nacional, o miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se podrá cumplir a su respecto con todos los actos procesales que prevean los códigos, inclusive se lo podrá citar para indagatoria y dictar auto de procesamiento, salvo en los casos que impliquen detención o prisión de aquél

Si existiere mérito para disponer la detención, el tribunal interviniente deberá solicitar para la destitución la correspondiente formación de causa de enjuiciamiento político ante la Cámara de Diputados de la Nación, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida.

Si hubiere sido detenido por haber sido sorprendido *in fraganti* en la comisión de un delito, el tribunal interviniente deberá dar conocimiento inmediato a la Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 2º — Respecto de la inmunidad de arresto del presidente de la Nación, del vicepresidente de la Nación, del jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros del Poder Ejecutivo nacional, y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se entiende que:

- a) Para aquellos funcionarios que ocupen cargos surgidos de elección popular, la inmunidad rige desde el día de su elección;
- b) Para aquellos funcionarios que ocupen cargos no electivos, la inmunidad rige desde el día de la jura al cargo.

Art. 3º — Cuando la Cámara de Diputados de la Nación reciba una solicitud de enjuiciamiento político contra el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, un ministro del Poder Ejecutivo nacional, o los

miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta deberá ser inmediatamente girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales respectiva, la que deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud a la Cámara.

Vencido el plazo de sesenta días, la Cámara deberá tratarlo en la primera sesión que tuviere el cuerpo con o sin dictamen de comisión.

Art. 4º — Mientras no se produzca la suspensión o destitución del funcionario imputado a que se refiere el artículo anterior, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones hasta que la Cámara correspondiente resuelva la suspensión o destitución.

Durante el tiempo en que se encuentren suspendidas las actuaciones se interrumpe el plazo de la prescripción.

Art. 5º — Deróganse los artículos 190, 191 y 192 de la ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan H. González Gaviola.

3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, . . .

INMUNIDADES PARLAMENTARIAS

Artículo 1º — A los efectos de la interpretación de la inmunidad parlamentaria consagrada por los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional se establece que cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, se podrá cumplir a su respecto con todos los actos procesales que prevean los códigos, inclusive se lo podrá citar para indagatoria y dictar auto de procesamiento, salvo en los casos que impliquen detención o prisión de aquél.

Si existiere mérito para disponer la detención del legislador, el tribunal deberá solicitar el desafuero a la Cámara respectiva, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida.

Art. 2º — Respecto de la inmunidad de los legisladores nacionales, se entiende que:

- a) La inmunidad del legislador rige desde el día de su elección;
- b) En caso de que un legislador reemplace a otro por renuncia o fallecimiento, la inmunidad señalada comenzará a regir desde la fecha en que se produjera la vacante;
- c) La mencionada inmunidad ampara al legislador tanto respecto de las acciones penales como las civiles, en tanto las mismas deriven de las acciones u opiniones vertidas en el estricto ejercicio de su mandato;

- d) Al finalizar su mandato el legislador no podrá ser perseguido por los hechos amparados en la inmunidad referida.

Art. 3º — Cuando alguna de las Cámaras del Congreso de la Nación reciba una solicitud de desafuero contra alguno de sus miembros, ésta deberá ser inmediatamente girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales respectiva, la que deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud a la Cámara.

Vencido el plazo de sesenta días, la Cámara deberá tratarlo en la primera sesión que tuviere el cuerpo con o sin dictamen de comisión.

Art. 4º — Mientras no se produzca la suspensión o destitución del legislador imputado a que se refiere el artículo anterior, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones hasta que la Cámara correspondiente resuelva la suspensión o el desafuero.

Durante el tiempo en que se encuentren suspendidas las actuaciones, en virtud de las inmunidades parlamentarias, se interrumpe el plazo de la prescripción.

Art. 5º — Deróganse los artículos 189, 191 y 192 de la ley 23 984, Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan H. González Gaviola.

4

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LIMITACIONES A LA INMUNIDAD
DE ARRESTO

Artículo 1º — Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra el presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros del Poder Ejecutivo nacional, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o de los demás magistrados del Poder Judicial de la Nación; se podrá cumplir a su respecto con todos los actos procesales que prevean los códigos, inclusive se lo podrá citar para indagatoria y dictar auto de procesamiento, salvo en los casos que impliquen detención o prisión de aquél.

Si existiere mérito para disponer la detención, el tribunal interviniente deberá solicitar previamente para hacer efectiva la detención o prisión preventiva, la destitución mediante la correspondiente formación de causa de enjuiciamiento político ante la Cámara de Diputados de la Nación, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida

Si hubiere sido detenido por haber sido sorprendido *in fraganti* en la comisión de un delito, el tribunal interviniente deberá dar conocimiento inmediato a la Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 2º — Respecto de la inmunidad de arresto del presidente del Nación, del vicepresidente de la Nación, del jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros del Poder Ejecutivo nacional, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás magistrados del Poder Judicial de la Nación; se entiende que:

- a) Para aquellos funcionarios que ocupen cargos surgidos de elección popular, la inmunidad rige desde el día de su elección,
- b) Para aquellos funcionarios que ocupen cargos no electivos, la inmunidad rige desde el día de la jura al cargo.

Art. 3º — Cuando la Cámara de Diputados de la Nación reciba una solicitud de enjuiciamiento político contra el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, un ministro del Poder Ejecutivo nacional, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o de los demás magistrados del Poder Judicial de la Nación, ésta deberá ser inmediatamente guada a la Comisión de Asuntos Constitucionales respectiva, la que deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud a la Cámara.

Vencido el plazo de sesenta días, la Cámara deberá tratarlo en la primera sesión que tuviere el cuerpo con o sin dictamen de comisión.

Art. 4º — Mientras no se produzca la suspensión o destitución del funcionario imputado a que se refiere el artículo anterior, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones hasta que la Cámara correspondiente resuelva la suspensión o destitución.

Durante el tiempo en que se encuentren suspendidas las actuaciones se interrumpe el plazo de la prescripción.

Art. 5º — Deróganse los artículos 190, 191 y 192 de la ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José A. Vitar. — Rafael H. Flores.

5

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LIMITACIONES A LAS INMUNIDADES PARLAMENTARIAS

Artículo 1º — A los efectos de la interpretación de la inmunidad parlamentaria consagrada por los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional se

establece que cuando se formule requerimiento fiscal o querrela contra un legislador, se podrá cumplir a su respecto con todos los actos procesales que prevean los códigos, inclusive se lo podrá citar para indagatoria y dictar auto de procesamiento, salvo en los casos que impliquen detención o prisión de aquél.

Si existiere mérito para disponer la detención del legislador, el tribunal deberá solicitar el desafuero a la Cámara respectiva, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida.

Art. 2º — Los legisladores que tengan causa penal pendiente por delito de acción pública, y se encuentren procesados, no podrán asumir como legisladores nacionales, ni gozar de fueros, hasta tanto no se encuentren sobreseídos en las mismas.

Art. 3º — Respecto de la inmunidad de los legisladores nacionales, se entiende que:

- a) La inmunidad del legislador rige desde el día de su elección;
- b) En caso de que un legislador reemplace a otro por renuncia o fallecimiento, la inmunidad señalada comenzará a regir desde la fecha en que se produjera la vacante;
- c) La mencionada inmunidad ampara al legislador tanto respecto de las acciones penales como las civiles, en tanto las mismas derivan de las acciones u opiniones vertidas en el estricto ejercicio de su mandato;
- d) Al finalizar su mandato el legislador no podrá ser perseguido por los hechos amparados en la inmunidad referida;
- e) Ningún legislador nacional podrá alegar inmunidad de su cargo, por causas anteriores a que rija la inmunidad en las que estuviere imputado, o procesado por delito de acción pública.

Art. 4º — Cuando alguna de las Cámaras del Congreso de la Nación reciba una solicitud de desafuero contra alguno de sus miembros, ésta deberá ser inmediatamente girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales respectiva, la que deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud a la Cámara.

Vencido el plazo de sesenta días, la Cámara deberá tratarlo en la primera sesión que tuviere el cuerpo con o sin dictamen de comisión.

Art. 5º — Mientras no se produzca la suspensión o destitución del legislador imputado a que se refiere el artículo anterior, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones hasta que la Cámara correspondiente resuelva la suspensión o el desafuero.

Durante el tiempo en que se encuentren suspendidas las actuaciones, en virtud de las inmunidades parlamentarias, se interrumpe el plazo de la prescripción.

Art. 6º — Deróganse los artículos 189, 191 y 192 de la ley 23.984, Código Procesal Pcnal de la Nación.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José A. Vitar.

6

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, . . .

REGLAMENTACION DE LAS INMUNIDADES
PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 53, 68, 69 y 70
DE LA CONSTITUCION NACIONAL

CAPÍTULO I

De la inmunidad de los legisladores

Artículo 1º — Las inmunidades reconocidas por la Constitución Nacional a los legisladores tienen por objeto garantizar el libre ejercicio y la independencia de las instituciones republicanas, asegurando el ámbito de protección en el que se desarrollará la función legislativa, no pudiendo ser interpretadas en ningún caso como privilegios personales.

Art. 2º — La inmunidad prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional ampara a los legisladores desde el día de su elección hasta el del cese de su mandato, tanto respecto de las acciones penales como de las civiles que pudieren derivar de las opiniones o discursos vertidos en el ejercicio del mismo.

En caso de que por cualquier circunstancia el legislador electo no asumiera su mandato, o una vez en funciones fuere reemplazado, sus inmunidades cesarán con la resolución de la justicia electoral en tal sentido, y en el mismo acto deberá investirse con ellas al reemplazante.

El legislador no podrá ser perseguido en ningún tiempo por los hechos que, amparados en la inmunidad referida, se hubieren producido durante el ejercicio de su mandato.

Art. 3º — Los alcances de las inmunidades previstas en los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional no implican, en ningún caso, inmunidad de proceso, pudiendo el tribunal competente someter a un legislador a toda actuación procesal hasta el dictado de sentencia inclusive, salvo los actos procesales que impliquen su detención o prisión.

Tampoco estas inmunidades amparan al legislador respecto de las acciones penales o civiles incoadas contra su persona por los hechos o actos ejercidos con anterioridad al mandato vigente.

Art. 4º — Si el tribunal competente encontrare mérito suficiente para disponer la detención del legislador o llegare el momento de ejecutar una sentencia firme, solicitará el desafuero a la Cámara correspondiente, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida.

Cuando una de las Cámaras del Congreso Nacional reciba una solicitud de desafuero contra alguno de sus miembros, será girada de inmediato a la Comisión de Asuntos Constitucionales respectiva, la que deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, mediante resolución fundada y el voto nominal de sus miembros, asegurando el derecho de defensa del imputado.

Si la Cámara se hallare en receso, la Presidencia deberá convocar de inmediato a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En cualquiera de los supuestos previstos en el presente artículo, vencido el plazo de treinta días y no existiendo dictamen de la comisión, la Cámara deberá tratar la solicitud en la primera sesión que tuviere el cuerpo. En caso de receso se convocará a sesión especial al efecto.

El desafuero debe ser aprobado por los dos tercios (2/3) del cuerpo legislativo o por mayoría simple a pedido del legislador involucrado.

CAPÍTULO II

De la inmunidad de los funcionarios

Art. 5º — La inmunidad de la que gozan el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen por objeto garantizar el libre ejercicio y la independencia de las instituciones republicanas, asegurando el ámbito de protección en el que desarrollarán sus funciones, no pudiendo ser interpretadas, en ningún caso, como privilegios personales.

Art. 6º — La inmunidad prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional ampara a los funcionarios allí mencionados, por los siguientes períodos:

- A los funcionarios que ocupen cargos surgidos de la elección popular, desde el día de su elección hasta el del cese de su mandato
- A los funcionarios que ocupen cargos no electivos, desde el día de la jura al cargo hasta el día de cese en el mismo.

Art. 7º — Cuando la Cámara de Diputados de la Nación reciba una solicitud de enjuiciamiento político contra el presidente de la Nación, el vicepresidente

sidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional o los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta será girada de inmediato a la Comisión de Juicio Político, la que a los fines previstos en el artículo 53 de la Constitución Nacional deberá emitir dictamen en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde la fecha de ingreso de la solicitud a la Cámara, mediante resolución fundada y el voto nominal de sus miembros, asegurando el derecho de defensa del imputado.

En caso de receso de la Cámara, la Presidencia convocará de inmediato a los integrantes de la Comisión de Juicio Político para que dictaminen dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En cualquiera de los supuestos previstos en el presente artículo, vencido el plazo de treinta días y no existiendo dictamen de la comisión, la Cámara deberá tratar la solicitud en la primera sesión que tuviere el cuerpo. En caso de receso se convocará a sesión especial al efecto.

CAPÍTULO III

De las modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación

Art 8º — Sustitúyese el artículo 189 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 189. Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el tribunal competente podrá cumplir todos los actos procesales previstos en este Código, inclusive se lo podrá citar para indagatoria y dictar sentencia, sin necesidad de trámite especial ante el Congreso de la Nación, con excepción de los que impliquen la detención o prisión de aquél.

En el caso en que el legislador sometido a proceso no compareciera a declarar sin acreditar justa causa, podrá ser conducido por la fuerza pública ante el tribunal competente.

Si existiere mérito para disponer la detención del legislador, o llegare el momento de ejecutar una sentencia firme, el tribunal competente deberá previamente, sólo en ese caso, solicitar el desafuero al cuerpo legislativo al que el mismo pertenezca, acompañando copia certificada de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen la medida.

La decisión de quitar los fueros a un legislador deberá ser aprobada por las 2/3 partes del total de los miembros de la Cámara respectiva, o por mayoría simple a pedido del legislador.

Si el legislador hubiera sido detenido por habérselo sorprendido *in fraganti* en la comisión

de un delito, el tribunal pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento del cuerpo legislativo correspondiente y solicitará su desafuero, acompañando copia certificada de las actuaciones, y expresando las razones que justifican la medida.

En cualquiera de las actuaciones a que se refiere el presente artículo, no podrá vulnerarse la inmunidad del legislador nacional, consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional.

Art. 9° — Sustitúyese el artículo 190 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 190: Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra el presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros del Poder Ejecutivo nacional, o miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal deberá girar las actuaciones a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación a los fines previstos en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sólo podrán ser procesados si fueren suspendidos o destituidos.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 191 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Artículo 191: Si fuere denegado el desafuero del legislador, pedido a los efectos del artículo 189, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder a la detención y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones, hasta el momento en que aquél no cuente con fueros parlamentarios.

En el caso contrario, dispondrá la continuación de los actos procesales en los términos previstos por este Código.

Si no se produjere la suspensión o destitución del funcionario imputado a que se refiere el artículo 190, el tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones, hasta que resuelva en definitiva el organismo competente previsto en la Constitución.

En el caso contrario, dispondrá la formación del proceso o dará curso a la querella, en la forma prevista en este Código.

Durante el tiempo en que las actuaciones se encuentren archivadas provisoriamente en los términos de este artículo, se suspenderá la prescripción de la acción, que se reiniciará al finalizar el mandato del legislador, o el cese en el cargo del funcionario.

Art. 11. — Sustitúyese el artículo 192 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente.

Artículo 192: La aplicación de las normas constitucionales y procesales relativas a las inmunidades, en ningún caso podrán ser invocadas para que su aplicación alcance a otros imputados no comprendidos en ellas.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos A. Raimundi. — Nilda C. Garré.